

Las astillas del sector maderero

Por Henry Chávez

Normativas deficientes para el control forestal, falta de inversión en reforestación, altos costos de producción y mano de obra, son algunos de los problemas que enfrenta el sector maderero ecuatoriano.

timaciones de la Corporación de Manejo Forestal Sustentable, Comafors). La provincia de Esmeraldas ha sido la más afectada, pues más del 70% de la madera que actualmente se extrae proviene de sus bosques, lo que ha llevado a un deterioro acelerado de la biodiversidad albergada en ellos.

Actualmente, la tasa de deforestación anual en todo el país se estima en

La industria maderera nació hace cuatro décadas: la firma pionera fue Plywood Ecuatoriana (1962). Actualmente operan muchas empresas dedicadas a la elaboración de tableros, aglomerados, molduras, puertas, muebles y otros artículos. Parte de esta producción, así como madera sin elaborar, se exporta desde un sector productivo cuya actividad tiene un fuerte impacto ambiental.

Deterioro de los bosques

Los bosques naturales y cultivados —la base de la industria maderera— se han deteriorado rápidamente debido a un manejo deficiente y no sustentable, a la falta de inversión en reforestación, a la carencia de un ordenamiento territorial adecuado, al crecimiento urbano descontrolado y a la incidencia de altos índices de pobreza rural. La tala es fuente de recursos inmediatos y facilita el uso agrícola del suelo. Para campesinos que viven en niveles de subsistencia, esta alternativa resulta preferible a la conservación del recurso forestal.

El bosque nativo ecuatoriano se ha reducido de 15,6 millones de Ha en 1962 a 8,9 millones de Ha en 2001 (es-

120.000 Ha (Inefan). Esta cifra puede alcanzar, según otras fuentes, hasta las 340.000 Ha por año. Como la pobreza de la población asentada en el noroccidente de Esmeraldas se ha intensificado, la presión sobre el bosque, causada por el incremento de la tala informal, también ha crecido. Muchas comunidades de la zona ya han empezado a sentir los efectos negativos de este proceso destructivo, que implica la reducción de otros recursos y servicios ambientales.

Los pobladores de la región no están contentos con los bajos precios pagados por las empresas e intermediarios. En Borbón —donde se comercializan los troncos talados por los pobladores de las diversas comunidades de la región (la mayoría informales y sin conocimiento de manejo sustentable del recurso)— se paga alrededor de \$ 1,50 por metro cúbico que luego se comercializa en el exterior en unos \$ 300

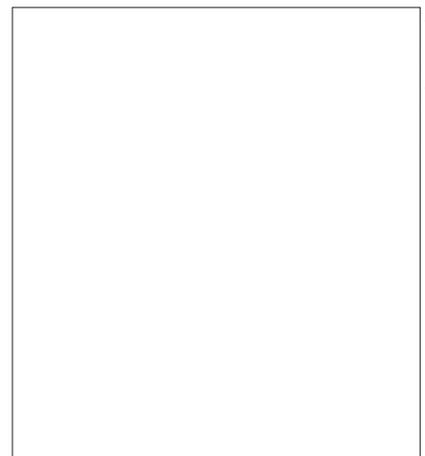
por metro cúbico, y en más de \$ 400 en el caso de tableros aglomerados.

Si la tasa de deforestación se mantiene en los niveles prevalecientes, en 25 años habrán desaparecido los bosques del país. Si no se toman medidas inmediatas para solucionar la situación económica de las poblaciones rurales dedicadas a la tala informal y los problemas del control forestal, el deterioro se acelerará y será imposible la recuperación y la reparación de los daños ambientales (la pérdida de biodiversidad implica la reducción de la capacidad de regeneración del bosque).

Falta de información

El Ecuador continental tiene una superficie total aproximada de 24,7 millones de Ha (según el *Mapa de Cobertura y Uso del Suelo* de 1990). De estas, 10,7 millones de Ha eran bosques (*Grafico 1*). El Censo Agrícola de 2000 muestra que la frontera agrícola bordea actualmente las 12,3 millones de Ha (50% de la superficie nacional), lo que denota el gran deterioro de los recursos forestales y naturales (al menos 5% de la superficie, es decir unas 1,2 millones de Ha), pues esta expansión de los suelos agrícolas se da a costa de las superficies naturales. Los altos niveles de pobreza en el sector rural obligan a sus pobladores a migrar a los centros urbanos provocando el crecimiento descontrolado de las ciudades, lo que a su vez afecta directamente los bosques que las rodean (recuérdese lo sucedido en los valles de Los Chillos, Cumbayá y Tumbaco, en Quito; la vía a Samborondón, en Guayaquil; las nuevas urbanizaciones de Cuenca, Machala, Santo Domingo de los Colorados o cualquiera de las ciudades intermedias).

Según Edgar Vásquez, ingeniero forestal de la Asociación de Industriales Madereros, Aima, el 70% de la madera comerciada proviene de tala informal. Esto dificulta la obtención de certificaciones ambientales, requisito fundamental para la exportación. El Ministerio del Ambiente ha impulsado una serie de normativas para controlar los recursos forestales. Sin embargo, la falta de una política adecua-



Edgar Vásquez, ingeniero forestal de la Asociación de Industriales Madereros, AIMA.

Fotos: Rodrigo Buendía



Fuente: AIMA.

da y la ausencia de información han provocado la oposición de los empresarios del sector y no han reducido la tala indiscriminada de los recursos. En opinión de Vásquez, “al establecer estas normativas sin una base técnica exacta, se corre el riesgo de que los resultados no se ajusten a la realidad”.

¿Tercerizar el control forestal?

En vista de los resultados nada satisfactorios de las políticas implementadas en el pasado por el Inefan, en la última etapa del Gobierno de Noboa se promovió la “tercerización” del control ambiental. Una empresa privada se encargaría de todos los aspectos relacionados con la explotación forestal (*Recuadro pág. sig.*).

Esta decisión ha despertado la oposición del sector empresarial, basada en que el plan del ministerio imputa los costos del control a los dueños de los bosques. La tarifa sería de \$ 2,7

Foto: Archivo Diners

Polémica por tercerización del control

Antes del cambio de gobierno, el Ministerio del Ambiente (MA) se vio envuelto en una polémica por su decisión de delegar a una empresa privada los servicios de la administración y control forestales.

Pablo Matheus, director ejecutivo de Cormadera, difundió a través del correo electrónico un duro comunicado contra la medida. Matheus afirmó que lo hecho por el ministerio era crear una “tasa a la reforestación”, producto de la mente de “cualquier trasnochado” al haber concebido una idea “que ha tomado visos de estupidez”.

La respuesta vino de Hans Thiel, ingeniero forestal y subsecretario de Capital Natural del MA, quien rechazó “los improperios” y aclaró que el MA en ningún momento ha establecido una “tasa a la reforestación”. Según él, en virtud del mandato contenido en la Ley Forestal y en la Ley Trole 2, ese ministerio “ha controlado el aprovechamiento forestal, y ha cobrado una tasa por la entrega de las respectivas licencias de aprovechamiento forestal y de las guías de circulación de productos forestales (así como de su respectivo control y verificación)”.

Basado en la Ley de Modernización del Estado, el MA decidió delegar a una empresa privada la prestación de estos servicios. Para ello, recuerda Thiel, convocó en mayo de 2002 a una licitación pública internacional en la cual participaron cuatro empresas internacionales. El proceso licitatorio concluyó el 22 de noviembre de 2002 con la firma del Contrato de Delegación a la Iniciativa Privada de los Servicios Técnicos de Administración y Supervisión Forestales entre el Ministerio del Ambiente y la empresa SGS del Ecuador, miembro del grupo suizo Société Generale de Surveillance. La tarifa que SGS del Ecuador estará autorizada a cobrar por la prestación de los servicios mencionados es de US \$ 2,70 / m³ de madera proveniente de bosques nativos y US \$ 0,10 / m³ de madera proveniente de plantaciones forestales. Estas tarifas pueden ser modificadas únicamente por el MA.

La tarifa, insiste Thiel, será cobrada por la contratista cuando los bosques o las plantaciones vayan a ser aprovechados y su madera sea movilizada. No se trata de una “tasa a la reforestación”. Aclara, además, que la contratación de SGS del Ecuador completa el Sistema Nacional Tercerizado de Control Forestal (SNTCF), el cual, dice, “es pionero a nivel mundial en tanto en cuanto vincula y corresponsabiliza a diferentes actores públicos, no gubernamentales (Vigilancia Verde), profesionales (Regentes Forestales), privados y empresariales en una cadena de custodia responsable de garantizar que la madera que se aprovecha, transporta y comercializa en el Ecuador sea de origen legal y provenga de prácticas de aprovechamiento forestal sustentables”.

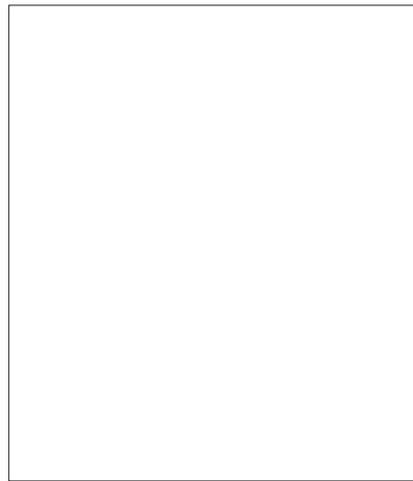
Foto: Cortesía Expoforestal.

Madera lista para su procesamiento y exportación.

por metro cúbico de madera proveniente de bosques nativos y de \$ 0,1 por metro cúbico de madera proveniente de plantaciones. Aima se opone a la tercerización del control forestal de bosques cultivados, pues de aplicarse la propuesta se recargaría un costo que les haría perder competitividad. Su director ejecutivo, **Álvaro Maldonado**, afirma que “Nosotros, como sector formal, apoyamos todo lo que implique control [pues] nuestra peor competencia es definitivamente la informalidad y la corrupción. Sin embargo, el sector maderero no puede asumir, ni aceptar más costos... A diferencia de otros países en los que hay incentivos para reforestar, aquí nos es-

tán poniendo más costos y más tasas. Las normativas son eficientes con nosotros, más no con los informales”. Estarían, no obstante, dispuestos a asumir el financiamiento del control de maderas provenientes de bosques nativos.

El Ministerio del Ambiente adjudicó el control forestal a la Société Generale de Surveillance, SGS (noviembre de 2002), pero el sector empresarial exige que se revise la propuesta. ¿Realmente la privatización del control logrará detener la tala in-



Álvaro Maldonado,
director ejecutivo de AIMA.

La ineficacia de las políticas anteriores muchas veces tuvo su raíz en la falta de seriedad y en prácticas de corrupción en la emisión de licencias de aprovechamiento y movilización de madera. ¿Puede garantizarse que estos problemas se eliminarán al ceder la autoridad a una empresa privada?

formal y el manejo antitécnico e insostenible? La propuesta de ese ministerio no ha considerado los problemas estructurales que afectan al sector, como la pobreza y la ausencia de alternativas para las economías campesinas de subsistencia. La ineficacia de las políticas anteriores muchas veces tuvo su raíz en la falta de seriedad y en prácticas de corrupción en la emisión de licencias de aprovechamiento y movilización de madera.

¿Puede garantizarse que estos problemas se eliminarán al ceder la autoridad a una empresa privada?

Los problemas del comercio exterior

En 2002 las manufacturas de madera representaron 6% del PIB industrial. En conjunto aportaron a la economía con 2% del PIB total. La exportación de productos silvícolas (madera no industrializada) fue de 75 mil TM por un valor de \$ 21,5 millones, lo que significó un decrecimiento respecto a 2001 de 63% en volumen y de 10% en valor.

En 2001 las exportaciones de maderas terciadas y prensadas fueron de \$ 38 millones (1% menos que en 2000) y en 2002 serían de \$ 29 millones (25% menos que en 2001). Las restricciones de tipo ambiental han incrementado considerablemente los costos de producción, bajando la competitividad del sector.

Entre enero y noviembre del año pasado la Ley de Preferencias Arancelarias y Erradicación de las Drogas (Atpdea) excluyó de la exoneración de aranceles la importación de productos de la madera al mercado norteamericano. “La decisión de los Estados Unidos de no considerarnos dentro de la Atpdea fue gravísima. Por ejemplo, los tableros de la fábrica Plywood estaban entrando con un arancel adicional de ocho puntos porcentuales sobre lo que se pagaba antes”, dice Maldonado. Adicionalmente, los problemas de manejo de los recursos forestales en su etapa primaria han dificultado el abastecimiento de materia prima, en detrimento de la producción.

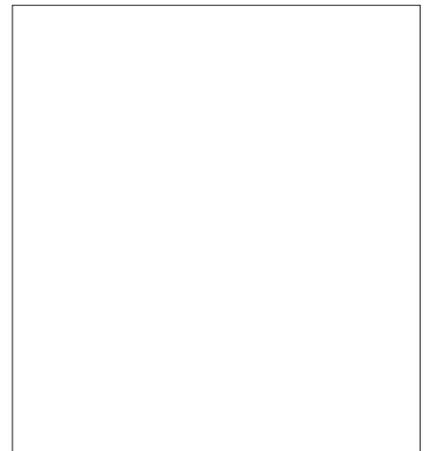
Varias empresas están tratando de obtener las certificaciones ambientales, lo que permitirá el aumento de las exportaciones hacia los mercados que exigen este tipo de licencias. Aunque buscan garantizar la sustentabilidad de la explotación maderera, medidas de esta naturaleza también constituyen restricciones de los países industrializados que amenazan con convertirse en una práctica común del mercado internacional. Estas exigencias no to-

man en cuenta que la mayoría de la madera es extraída informalmente, lo que imposibilita la obtención de certificaciones, y excluyen a la mayoría de empresas madereras que no poseen plantaciones.

También los fabricantes de muebles redujeron sus exportaciones a \$ 2,8 millones (20% menos que en 2001) (Gráfico 2). Esta caída se debe principalmente a que los precios de los productos nacionales están perdiendo competitividad debido a los altos costos de producción, a la rigidez cambiaria que impone la dolarización y a que en la rama opera un oligopolio de proveedores de madera procesada que impide una formación competitiva de los precios de los insumos. Según Carlos Garrido, director del sector maderero de la Cámara de la Pequeña Industria (Capeipi), “es visible que los productores o pro-



Fuente: Banco Central del Ecuador.



Carlos Garrido,
director ejecutivo del sector maderero de
la Cámara de la Pequeña Industria.

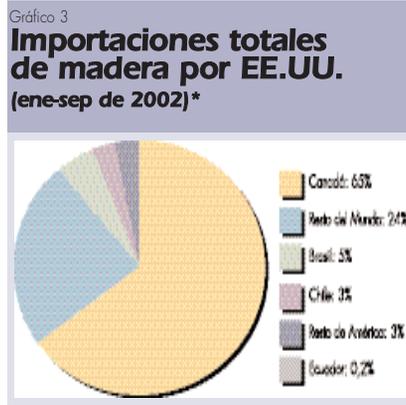
veedores de madera procesada forman un oligopolio. Tenemos por un lado Edimca y por otro Álvarez Barba. Ellos manejan los precios, manejan la calidad, manejan el mercado. No existe la posibilidad de que los precios tiendan a reducirse. Incluso los precios de exportación de aquellas empresas son menores a los que fijan para el mercado nacional. El mismo producto importado, por ejemplo de Chile, resulta más barato. Por eso los pequeños industriales estamos pensando en asociarnos para negociar con los proveedores nacionales o dar paso a la importación de insumos y materia prima más barata”.

Alca: ¿amenaza u oportunidad?

El sector maderero se encuentra en una encrucijada. La contracción del mercado interno y la pérdida de competitividad en el exterior presentan un panorama oscuro.

El sector maderero se encuentra en una encrucijada. La contracción del mercado interno y la pérdida de competitividad en el exterior presentan un panorama oscuro. En buena medida, ambos problemas son el producto de la crisis estructural de la economía ecuatoriana.

La dolarización ha incrementado los costos y los precios de venta en los mercados internacionales lo que, sumado al proceso inflacionario, tiende a reducir los márgenes de ganancia de los empresarios manufactureros, aunque no de los intermediarios de productos silvícolas. La mano de obra barata ha comenzado a escasear debido a la migración de los últimos años;



*Valor total importado: US\$ 12.104 millones.
Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

esto ha reducido la oferta de operarios calificados, elevando sus remuneraciones y eliminando el factor productivo que daba cierta “ventaja” al producto nacional. La pérdida de dinamismo del sector, especialmente en el último año, es una consecuencia de esta situación.

Las verdaderas posibilidades del sector dentro del proceso de liberalización que propone el Área de Libre Comercio de las Américas (Alca) deben ser estudiadas con detenimiento. Estados Unidos es el principal mercado de las exportaciones madereras ecuatorianas: concentra el 72% de las compras de productos silvícolas, el 36% de maderas terciadas y prensadas y el 54% de muebles de madera. En conjunto, el continente americano recibe el 83%, el 85% y el 95%, respectivamente, de las ventas externas de esos productos. Las ventajas de acceder a este inmenso mercado sin restricciones arancelarias son obvias. Pero persiste la amenaza de no poder posicionarse por la pérdida de competitividad, tomando en cuenta que casi todos los países que integrarían el Alca aún pueden devaluar sus monedas. En este caso, Ecuador se vería invadido de productos extranjeros. No se debe olvidar que Canadá, Estados Unidos, Brasil y Chile (Gráfico 3) son grandes productores de madera y que su capacidad tecnológica, así como el manejo de sus recursos forestales, son superiores a los ecuatorianos.

G

Inversora Pichincha obtuvo la calificación BRC 1 para obligaciones de corto plazo

La firma BRC Investor Service S.A. informó que CFC Inversora Pichincha, una empresa del Banco del Pichincha y Diners Club del Ecuador, obtuvo una calificación BRC 1 para las obligaciones a corto plazo, que corresponde a una de las primeras categorías en grado de inversión.

CFC Inversora Pichincha es la tercera financiera más grande de Colombia y procesa 3.500 operaciones crediticias al mes y posee además una categoría AA para las obligaciones a largo plazo.

Las emisiones corporativas calificadas por la compañía se han colocado en un cien por ciento.

Actualmente, cuenta con oficinas en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Pereira, Armenia, Zapatoca, Soconó e Ipiales; tiene 46.000 clientes activos entre colocaciones y captaciones y 312 empleados especializados en créditos personales.

Entre los principales productos que ofrece están: “viaje fijo”, para lo cual posee alianzas con 400 agencias de viajes para el financiamiento de paquetes turísticos y pasajes; créditos para adquirir vehículos, para lo que ha suscrito convenios con 250 concesionarios, y créditos para cursar estudios universitarios, para lo que tiene acuerdos con las 35 universidades más importantes del país.

Inversora Pichincha tiene además Inverprimas que financia seguros revocables, y Crediflash que es un sistema de crédito inmediato que se descuenta de la nómina de las 450 empresas con las que mantiene relaciones.

La comercialización de los productos de la financiera se hace a través de canales alternos de distribución como universidades, compañías de seguros, agencias de viaje, concesionarios de vehículos y empresas comerciales e industriales. G